

La confirmación de la vía judicial para las causas de nulidad del matrimonio en el m.p. *Mitis Iudex*

(Notas para una sesión del XXVIII Curso de Actualización en Derecho canónico,
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, 12-13 de noviembre de 2015)

Jorge Miras

Sumario: Advertencia preliminar.- 1. Planteamiento de la cuestión en el Sínodo de 2014.- 2. Acogida de las propuestas en el *motu proprio*.- 3. Motivos del rechazo de la vía administrativa.- 4. Motivos de la opción por la vía judicial.- a) El deber de tutelar la verdad del vínculo.- b) Alcance de las garantías del orden judicial.- c) Materias por naturaleza judiciales o administrativas.- 5. Valoración técnica de la solución del *motu proprio* (a modo de conclusión).

Advertencia preliminar

He titulado el tema de mi intervención: **“La confirmación de la vía judicial para las causas de nulidad del matrimonio en el m.p. *Mitis Iudex*”**.

Como habrán advertido, el título es diferente del que figura en los programas del Curso de Actualización distribuidos, que es el que se me propuso hace unos meses, al encargarme la sesión: **“Procesos o procedimientos administrativos en las Causas matrimoniales”**.

La razón es, naturalmente, la publicación del *motu proprio Mitis Iudex* (y de su paralelo para las Iglesias Orientales católicas), que ha dejado ya resuelta la alternativa que el título original planteaba, en perspectiva *de lege ferenda*.

Por este motivo me pareció que había decaído el interés de dedicar una sesión de este curso a valorar hipotéticamente pros y contras del proceso y del procedimiento administrativo, como opciones para una revisión del trámite de las causas de nulidad matrimonial, que cuando acepté encargarme de esta sesión era solo una posibilidad futura.

Comuniqué este pensamiento a los organizadores del Curso, con la esperanza de quedar exonerado del compromiso a causa de la mutación sustancial de su objeto. Pero esa esperanza se ha demostrado vana, como indica mi presencia hoy aquí...

No obstante, bromas aparte, parece cierto que las circunstancias imponían al menos un cambio de enfoque en el planteamiento de la cuestión. Y eso es lo que he intentado que el nuevo título refleje.

Por tanto, trataré simplemente de bosquejar algunas consideraciones que puedan ser pertinentes para valorar el dato fundamental que el *motu proprio*

confirma, es decir, que el legislador considera que la vía más adecuada para tramitar las causas de nulidad matrimonial es el proceso judicial, ordinario o abreviado.

1. El planteamiento de la cuestión en el Sínodo de 2014

Entre los antecedentes inmediatos del *motu proprio* se encuentra el n. 48 de la *Relatio* del Sínodo de 2014:

“Un gran número de Padres ha subrayado la necesidad de hacer más accesibles y ágiles, y en lo posible totalmente gratuitos, los procedimientos para el examen de los casos de nulidad. Entre las propuestas, se ha indicado: la superación de la necesidad de la doble sentencia conforme; la posibilidad de establecer una vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano; un proceso sumario que pudiera emplearse en los casos de nulidad notoria”.

(Breve comentario)

2. La acogida de las propuestas en el m.p.

En la exposición de motivos del *motu proprio*, el legislador supremo hace suyo decididamente el objetivo al que apuntan estas propuestas, cuando dice: “En plena sintonía con estos deseos, mediante el presente documento he decidido dar normas con las que se favorezca, no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad y una justa simplicidad de los procesos, a fin de que el corazón de los fieles que esperan la declaración de su estado no se vea prolongadamente oprimido por las tinieblas de la duda, a causa del retardo en la resolución del juicio”.

Sin embargo, esa plena sintonía en cuanto al fin, no le lleva a asumir igualmente todas las medidas sugeridas en el pasaje citado de la *Relatio* de 2014 como posibles medios para alcanzarlo. Concretamente descarta la que se refiere al establecimiento de “una vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano”.

Se confía inmediatamente a la responsabilidad del Obispo¹, en cambio —además de todo lo relativo a la posible constitución del juez único en su diócesis—, el proceso sumario que se proponía para los casos de nulidad notoria, y que se ha plasmado en el nuevo proceso abreviado².

3. Los motivos del rechazo de la vía administrativa

Parece evidente que el Romano Pontífice tiene interés especial en dejar claro que lo que se atribuye con ese nuevo proceso al Obispo diocesano no es la *vía*

¹ Uno de los rasgos más marcados de la reforma es la consideración del papel que por derecho divino corresponde al Obispo en este ámbito, como Cabeza de la Iglesia particular y copartícipe, en cuanto miembro del Colegio episcopal, de la solicitud y responsabilidad pastoral universal del Romano Pontífice (cfr. m.p. *Mitis Iudex*, Proemio, II).

² Cfr. *Ibid.*, Proemio, III y c. 1676 § 2.

administrativa que la *Relatio* sugería, porque la exposición de motivos de *Mitis Iudex*, inmediatamente después del pasaje que acabo de citar, añade: “He hecho esto [la reforma] siguiendo las huellas de mis predecesores, que quisieron que las causas de nulidad del matrimonio se tramitaran por vía judicial, no administrativa”.

Se acoge así parcialmente la reserva, recogida también en el punto citado de la *Relatio*, de algunos Padres sinodales, que estimaban que las propuestas de reforma no ofrecían suficientes garantías: “(...) Algunos Padres, sin embargo, se manifiestan contrarios a estas propuestas porque no garantizarían un juicio fiable”.

Digo que se acoge parcialmente, porque el mencionado reparo se oponía indistintamente a las tres medidas que se apuntaban: tanto la supresión de la doble sentencia conforme, como el proceso sumario y la vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano. Puesto que esta última es la única que no ha sido acogida en el *motu proprio* de reforma, cabe entender que el legislador ha estimado que, efectivamente, la sugerida *vía administrativa* no garantizaba una actuación fiable en esta materia, mientras que el proceso, sea ordinario o abreviado, incluso en una única instancia, sí.

En la prensa se ha recogido un detalle que puede resultar ilustrativo sobre la motivación de fondo de esta opción legislativa. Durante el encuentro informal con los periodistas que viajaban en el avión papal al regreso del viaje por Estados Unidos, a finales de septiembre, se formuló entre otras esta pregunta: “A pocos días del Sínodo: ¿hay «divorcio católico»?”. El papa respondió con una rotunda negativa. Según lo publicado, el contenido preciso de la respuesta fue: “En la reforma de los procesos he cerrado la puerta a la vía administrativa, que era la vía por la cual podía entrar el divorcio, por tanto, quien piense que se ha legalizado el «divorcio católico» se equivoca”.

Con todas las cautelas que requiere el carácter coloquial de la intervención, y el hecho de que la fuente digital que consulté alternaba el estilo directo y el indirecto en su narración, creo que la noticia permite aproximarse con bastante seguridad, al menos, al sentido general del rechazo de la *vía administrativa* que estoy comentando.

Así pues, parece plausible la explicación de que las razones de que no se acoja la propuesta de la vía administrativa son, en síntesis, que no ofrece suficiente fiabilidad en esta materia y que cabría el riesgo de que por ella se introdujera en la Iglesia un modo de actuar calificable verdaderamente de *divorcio*.

4. Los motivos de la opción por la vía judicial

Naturalmente, la fundamentación de este planteamiento es la que se apuntaba ya en la precisión que hacía el citado n. 48 de la *Relatio*, después de enumerar las tres

propuestas de reforma ya mencionadas: “(...) Hay que confirmar que en todos estos casos se trata de determinar con certeza la verdad sobre la validez del vínculo”.

Por su parte, el *motu proprio*, con un lenguaje más técnico, como corresponde a la naturaleza de la fuente, explica, en efecto, que se ha querido mantener la vía judicial en las causas matrimoniales, “no porque lo imponga la naturaleza de la materia, sino más bien porque urge el requerimiento (el postulado, la necesidad, el deber) de tutelar lo más posible la verdad del vínculo, cosa que sin duda facilitan las garantías del orden judicial”³.

En esta explicación pueden distinguirse al menos tres componentes:

- Yo diría que, por orden de importancia, el primero es la afirmación que expresa el objetivo fundamental que ha de perseguirse en las causas matrimoniales: *[eo quod] postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae*.
- el segundo es el inciso final, que explica el motivo de que sea el proceso el medio técnico escogido para ese fin irrenunciable: *quod sane praestant ordinis iudicarii cautiones*.
- el tercero sería la primera frase del texto, que, entre otras cosas, establece el carácter no necesario, sino prudencial de esa opción: *non eo quod rei natura id imponat*.

Me detendré brevemente en cada uno de estos elementos, siguiendo el orden citado.

a) El deber de tutelar la verdad del vínculo

El legislador pone en el centro este deber. No podía ser de otro modo. La cuestión nunca ha sido, como sabemos, reconsiderar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, que tiene solidísimos fundamentos, a la luz de las posibles dificultades para transmitirla, recibirla o vivirla en determinadas circunstancias históricas.

Es precisamente la verdad del matrimonio lo que determina aquí el ámbito de lo indisponible: en cierto sentido señala el límite a la pura consideración práctica de circunstancias históricas y ambientales y de posibilidades técnicas. Pero yo subrayaría que no es solo la proverbial *línea roja* de delimitación.

Es sobre todo una *verdad*. No mera doctrina teórica, sino verdad viva, configuradora y llena de consecuencias en la vida concreta de cada fiel casado y en la vida de la Iglesia. Por eso indica sobre todo un ámbito de tutela jurídica.

³ “Quod fecimus [*la reforma*] vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudicarii cautiones”.

“Tutelar del mejor modo posible la verdad del vínculo”, en expresión del *motu proprio*, es una necesidad vital, en sentido fuerte, *urgente*, porque es servicio directo, no a “la doctrina”, sino a la *salus animarum*, a la *salus uniuscuiusque animae*.

Y me parece que la traducción técnica de ese servicio es el carácter en todo caso *declarativo* de la intervención de la autoridad en las causas de nulidad matrimonial. Esto sí que es un rasgo *necesario*.

Es decir, con independencia de que, hipotéticamente, esa intervención pudiera tener lugar por vía judicial o administrativa, la verdad del matrimonio exige en todo caso que se trate de una intervención declarativa, no constitutiva; que proceda buscando la verdad sobre la existencia del vínculo (es decir, sobre si los cónyuges lo son realmente o no); no establecer lo que se considere pastoralmente útil, oportuno o posible, dadas unas determinadas circunstancias.

b) Alcance de las garantías del orden judicial

Para la valoración que pretendo, me parece de cierto interés que nos detengamos brevemente a considerar diversas traducciones del inciso final de esta cita, con las que no estoy del todo conforme, por motivos no indiferentes.

Como recordarán, el texto que estamos considerando, después de expresar el objetivo de tutelar la verdad del vínculo que acabo de comentar, añade: *quod sane praestant ordinis iudiciarii cautiones*.

La traducción que propongo: “cosa que sin duda facilitan las garantías del orden judicial”, que admite otras fórmulas equivalentes, trata de suavizar las connotaciones de vinculación *necesaria* —en sentido metafísico— entre la tutela de la verdad del vínculo y el orden judicial, que evocan, quizá inadvertidamente, algunas de las traducciones del *motu proprio* que se encuentran en www.vatican.va.

En efecto, si se tradujera este pasaje de tal modo que diese a entender que se opta por el proceso porque quedaría excluida *a priori* la idoneidad de cualquier otra herramienta técnica para tutelar la verdad del vínculo, entonces la afirmación resultante se parecería demasiado a la motivación *ex natura rei* que el *motu proprio* rechaza de manera explícita, como hemos visto y comentaré en seguida.

Por ejemplo, la versión italiana traduce así el inciso al que me refiero: “e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario”. Afirmación que resulta, a mi juicio, un tanto excesiva. Hace que el texto del m.p. suene como si el legislador pretendiera, ingenuamente, manifestar la convicción de que el proceso garantiza de manera infalible que exista plena coincidencia entre la *verdad judicial* y la *verdad sustancial*; o de que impide absolutamente por sí mismo que existan divergencias entre ambas; o de que es el antídoto definitivo contra posibles corruptelas o

manipulaciones... Bien sabemos que no es así. Nada humano es así. Y el legislador lo sabe perfectamente, claro está.

Análogas reservas puede suscitar la traducción francesa (al menos en el sentido más fuerte que admite, si no me equivoco): “et cela est exactement fixé par les garanties de l’ordre judiciaire”. No me negarán que, expresado así, el aserto desprende cierto tufillo voluntarista, que no me parece acertado ni justo achacar al legislador.

Por su parte, la traducción castellana vierte, de modo algo más neutro, aunque no carente de cierto énfasis: “y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial”...

Cuando consulté el 21 de octubre, no había en www.vatican.va traducción inglesa, pero tampoco es cuestión ahora de acumular *pruebas*. Creo que los ejemplos que acabo de apuntar son suficientes para mostrar el riesgo conceptual al que me refiero: en definitiva, atribuir a la opción del legislador por el proceso, por el orden judicial, fundamentos desmesurados.

Eso, aparte de resultar —al menos para mí— intelectualmente incómodo, lo cual no tendría gran importancia, podría dar pie a un desastroso exceso de confianza en que las formas pueden garantizar por sí solas la tutela de los valores centrales en esta materia. En que la existencia de normas procesales, estas u otras, excusa del empeño personal de prepararse y preparar personas que tengan el corazón y la cabeza sintonizados con la verdad de la persona, y en consecuencia del matrimonio; es decir, con el sentir de la Iglesia.

Porque en realidad esas formas del proceso servirán o no, servirán mejor o peor a esa verdad, dependiendo de cómo —de con qué “calidad de conciencia” de los bienes en juego, de con qué pericia técnica y de con qué mentalidad— se interpreten y apliquen.

c) Materias por naturaleza judiciales o administrativas

Pasamos ya al tercero de los elementos que quería considerar. Es la frase que explica que la opción del *motu proprio* por el proceso no se debe a que así lo imponga la naturaleza de la materia.

Ese inciso establece ante todo el carácter no *necesario*, en el sentido de único posible, sino *prudencial* de la opción por el proceso. Es decir, afirma que se trata de una decisión del legislador no obligada, sino basada en razones de conveniencia, en definitiva (por eso, como acabo de explicar, me parecen desacertadas las traducciones que pueden hacer que parezca otra cosa).

A la vez (no sé si deliberadamente, pero sí de hecho), creo que la frase evita que esta opción del legislador pueda ser interpretada como si fuera consecuencia o

afirmación indirecta de una determinada toma de postura en determinado debate científico jurídico ya clásico⁴, atribuyendo así a la decisión un fundamento con pretensiones de necesidad (de *necesariedad*) y, en esa misma medida, minado por la debilidad y provisionalidad de lo opinable...

Pero no es ese el caso, a mi juicio, como he dicho. El texto del m.p. muestra con suficiente claridad que las razones de la decisión son de conveniencia, de una conveniencia sopesada y madurada: *non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuenda*.

Para vislumbrar en qué línea pueden moverse esas razones de conveniencia, cabría recordar por ejemplo la síntesis de doctrina que hacía Mörsdorf cuando explicaba la diferencia entre la actuación judicial y la administrativa, enumerando rasgos como los siguientes:

Actuación judicial / Actuación administrativa

Rasgos formales

- se inicia a instancia de parte
- sigue las normas del proceso
- independencia

Rasgos sustanciales

- consiste en una *cognitio veri*
- las decisiones constituyen *cosa juzgada*
- etc.

Rasgos formales

- se inicia de oficio
- procedimiento administrativo
- jerarquía

Rasgos sustanciales

- consiste en una *volitio boni*
- las decisiones no constituyen *cosa juzgada*
- etc.

Ciertamente, ninguno de esos criterios de distinción tiene un valor absoluto. Por ejemplo, el Prof. De Diego-Lora escribía al respecto, en 1976 (en *La función de justicia en la Iglesia*): “Si nos detuviéramos en analizar esos principios jurídicos de diferenciación, se vería con facilidad que ninguno de ellos es conclusivo”.

Yo estoy convencido también de que es así. Pero a la vez me parece que las razones de la preferencia por la vía judicial manifestada en el *motu proprio* —que creo que son buenas razones— están sin embargo sustentadas por criterios vecinos, especialmente al primero de los *rasgos sustanciales* citados, que es el más importante.

⁴ Se trata de la *vexata quaestio* de si existen materias de suyo administrativas y judiciales, un auténtico *topos* doctrinal no solo en el ámbito secular, sino, en menor medida, también en el canónico.

En este sentido creo que, además de reflexionar sobre las razones de conveniencia de la vía judicial, puede ser útil también dedicar un poco de atención explícitamente a las posibles *razones de inconveniencia* (por decirlo así) de la vía administrativa...

Y es que quizá deberíamos haber empezado por preguntarnos: ¿qué es exactamente la *vía administrativa*? O más precisamente: ¿en qué pensaban, qué estaban diciendo los Padres sinodales cuando proponían que se estudiase la posibilidad de “establecer una vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano”? ¿Qué rechaza exactamente el legislador cuando desestima esa propuesta y esa vía por las razones que hemos apuntado?

Puesto que no he planteado esa cuestión desde el principio, permítanme que la plantee al menos a modo de conclusión, siempre con la brevedad que estoy tratando de mantener.

5. Valoración técnica de la solución del m.p. (a modo de conclusión)

Me parece claro que la expresión *vía administrativa*, tal como se utiliza en el texto del n. 48 de la *Relatio*, quiere indicar el ámbito de actuación que corresponde al Obispo no en virtud de la potestad judicial, sino en virtud de la potestad ejecutiva.

Es posible, además, que implícitamente esté presente en esa expresión la identificación —ciertamente reductiva— de la actividad de la potestad ejecutiva con la actividad administrativa: o sea, la *volitio boni*, frente a la *cognitio veri* que caracterizaría a la actividad de la potestad judicial en la célebre formulación de Mörsdorf a la que antes aludía.

La expresión *vía administrativa* sería, así, entendida más o menos como la denominación de la actuación de la autoridad eclesiástica cuando, responsablemente y con discrecionalidad, maneja la valoración de las circunstancias concretas y toma las decisiones jurídicas que sean del caso conforme a criterios de posibilidad, utilidad, bien pastoral, oportunidad, etc.

Me parece que algo de este modo de entender las cosas puede haber influido en que se rechace la vía administrativa en los términos que hemos visto: si no el modo de entender mismo, al menos sí la conciencia de que este modo de entender, con todo lo que implica, podía estar presente en la propuesta de la *Relatio*.

Pero quizá —y entro ya en la valoración técnica anunciada— valdría la pena intentar clarificar un poco una última cuestión, aunque soy consciente de que no tiene la menor importancia práctica hoy por hoy. La expresaré primero en una formulación que quizá puede resultar un tanto críptica y después intentaré explicarla sintéticamente.

La cuestión es: si con la expresión *vía administrativa* se quiere indicar estrictamente la *función administrativa*, entonces los reparos que he apuntado u otros semejantes podrían ser válidos. Pero esas *razones de inconveniencia* no serían igualmente rigurosas si la *vía administrativa* significa la actuación de la potestad ejecutiva en general.

La razón es que la potestad ejecutiva (o *administrativa*) no realiza solo la función administrativa (del mismo modo que las otras potestades no realizan ni solo ni exclusivamente la función pública que lleva su nombre).

Esto es así porque las funciones se distinguen materialmente, según el contenido de lo que se hace; mientras que las potestades se delimitan formalmente (sujetos, competencias, procedimientos, actos y eficacia propios). Y en ningún ordenamiento actual, tampoco en el canónico, hay una coincidencia exacta, una simple *superponibilidad* entre funciones y potestades. Normalmente, por toda una serie de razones en las que ahora no me detendré, hay manifestaciones de cada función que está previsto que realicen en su ámbito propio, con diversos alcances, las *otras* potestades.

Concretamente, como saben, la potestad ejecutiva sostiene algunas actuaciones que son en realidad ejercicio de la función legislativa o normativa (cfr. cc. 31 ss., por ejemplo). Y otras que son ejercicio, por sus medios y cauces propios, de la función jurisdiccional, o judicial y entonces el procedimiento administrativo que sigue está orientado a la *cognitio veri*, que no es exclusiva de la potestad judicial ni, por tanto, del proceso, como sucede con todos los supuestos criterios de distinción judicial/administrativo que veíamos.

Así, por ejemplo, el c. 50 —uno de los pocos cc. que regulan explícitamente el procedimiento administrativo—, dice: “Antes de dar un decreto recabe la autoridad las informaciones y pruebas necesarias...”. Naturalmente, ‘pruebas’ añade un matiz esencial a las meras ‘informaciones’ en cuanto al modo de actuar, cuando son necesarias.

Lo son, por ejemplo, en el c. 1720, que delinea esquemáticamente el procedimiento que se ha de seguir para imponer una pena *por vía administrativa*, como se suele decir, que no requiere mayor comentario en lo que ahora nos ocupa: “Si el Ordinario estima que debe procederse mediante decreto extrajudicial: 1. hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente llamado, no quisiera comparecer; 2. debe sopesar cuidadosamente con dos asesores todas las pruebas y argumentos; 3. si consta con certeza el delito y no se ha extinguido la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cc. 1342-1350, exponiendo, al menos brevemente, las razones de derecho y de hecho”.

Otro ejemplo es la actuación de la potestad ejecutiva cuando resuelve un recurso administrativo, llamado jerárquico. En esos casos, basta leer las posibilidades de resolución que enumera el c. 1739 para darse cuenta de que no todas se basan en una *volitio boni*, es decir en una actuación en la que la autoridad resuelve el recurso *gobernando* con autoridad propia y superior sobre la materia del caso concreto, sino que algunas de ellas son más bien resultado de una auténtica *cognitio veri* que condiciona y fundamenta la actuación administrativa. En efecto, la norma citada dice: “Según lo requiera el caso, el Superior que resuelve el recurso puede no solo confirmar o declarar nulo el decreto, sino también rescindirlo o revocarlo o, si lo juzga más conveniente, corregirlo, sustituirlo por otro o abrogarlo”.

Por último, para no alargarnos, un ejemplo con especiales connotaciones en esta cuestión es la *Lex propria* del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, promulgada en 2008 por Benedicto XVI. Allí, en el título V, “De administrativa ratione procedendi”, el cap. V, “De nullitatis matrimonii declaratione”, contiene solo el art. 118: “Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur”. Aquí, aparte de otras cuestiones, se confirma que la materia no exige por sí misma un tratamiento judicial, como he señalado.

Por eso, desde el punto de vista técnico⁵, parece claro que lo que rechaza el *motu proprio* bajo la expresión *vía administrativa* no es cualquier tipo de actuación de la potestad ejecutiva, sino solo y concretamente el tipo más paradigmático de actuación administrativa, que resulta encuadrable propiamente en la “función administrativa”: es decir, aquella función pública consistente en poner los medios de que la autoridad dispone para resolver necesidades concretas en los ámbitos de su competencia, actuando conforme a criterios de oportunidad, utilidad, posibilidad, etc., y con el margen, más o menos amplio, de discrecionalidad que el derecho le confiere.

Asimismo, los males y peligros que se tratan de alejar con la opción por el proceso judicial no serían inherentes al procedimiento administrativo en sí mismo, como acabamos de ver en los ejemplos propuestos, sino solamente a ese tipo de actuación.

Por tanto, para concluir:

- La confirmación de la vía judicial en el *motu proprio* no vincula (ni a mi juicio pretende vincular) necesariamente, en abstracto, la verdad del matrimonio con determinada vía técnica.

⁵ Otra cosa serán las consideraciones de oportunidad en los diversos aspectos relevantes de cada situación histórica concreta, también en lo que se refiere al derecho vigente y a la formación del personal disponible para su aplicación fiable.

- Se trata fundamentalmente de una opción prudencial, pastoral, que dentro de los límites disponibles, intenta conjugar y armonizar: a) el bien que se pretende —que parece pasar, hoy por hoy, por una simplificación del tratamiento de las causas de nulidad—, b) los medios que se ponen —contando también en esto con las circunstancias concretas de la Iglesia hoy— c) y los riesgos que se asumen, procurando alejarlos mediante el rechazo de la llamada “vía administrativa”, porque de hecho es más fácil que puedan darse disfunciones en la actuación administrativa (aunque solo sea por desconocimiento).
- Establecer las prioridades y equilibrios que se consideran oportunos para buscar la correspondencia más adecuada entre los valores que hay que garantizar y los desafíos que debe afrontar la Iglesia, es una cuestión de política legislativa. Por ejemplo, introducir la exigencia de una cuádruple sentencia conforme, decidir que una sola sentencia es suficiente, establecer otro tipo de actuación declarativa —sin proceso judicial— de la autoridad de la Iglesia como cauce para las causas matrimoniales, y otras muchas posibilidades, son todas ellas fórmulas que técnicamente respetan la verdad del matrimonio. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y puede mostrar mayor o menor proclividad a unas u otras carencias a la hora de la aplicación.
- En definitiva, en cuanto a la cuestión que nos ocupa, no existe la fórmula sin fisuras. Si nos planteáramos ahora de modo meramente hipotético la pregunta que constituía el título original de esta lección: “Procesos o procedimientos administrativos en las Causas matrimoniales”, tendríamos que responder que depende. Procesos, o procedimientos administrativos, siempre que estos últimos regulen una actividad de cognición y conduzcan a una decisión declarativa de la autoridad, como antes decía.
- Establecer en cada momento histórico, dentro de los márgenes de actuación que deja el derecho divino, las fórmulas técnicas apropiadas, armonizando prudentemente necesidades, medios, fines, prioridades y riesgos asumibles, es responsabilidad del legislador. La nuestra es ponerlas en práctica lo mejor posible, sintiendo *cum Ecclesia*.